**20ª Jornadas Laborales.**

**AEAL-Gobierno de Aragón.**

**“*Nuevas fronteras jurídicas en el mundo laboral.- Diálogos con Magistrados*”.**

 **7-marzo-2024**.

“**La reforma del proceso social por el RDL 6/2013.- En especial, el pleito testigo y la extensión de efectos”.**

Fernando Salinas Molina.

Magistrado emérito de la Sala IV del Tribunal Supremo

**Sumario**:

**A/ INTRODUCCIÓN**.

**B/ ANALISIS DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA LRJS POR EL RDL 6/2003**.

**I.-DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL** (arts. 1 a 15 LRJS).

**1.- Art. 2.n)**:**“***Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan: ...“n) En impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral recaídas en los procedimientos previstos en el apartado 5 del artículo 47, en el artículo 47 bis) y en el apartado 7 del artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, así como las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral y sindical y, respecto de las demás impugnaciones de otros actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional***”**

**[1]** corrección sobre el párrafo afectado del **art. 47 ET**, ya que tras la ulterior reforma ET ex Real Decreto-ley 32/2021, la constatación por la autoridad laboral en supuestos de “fuerza mayor temporal” para la reducción de jornada o suspensión del contrato, se contiene en el **nº 5** y ya no en el nº 3; y

**2]** adicionar el supuesto del nuevo **art. 47 bis ET** ex RDL 32/2021 (“*Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo*”), que conlleva el dictado de actos administrativos para lograr la reducción de la jornada o la suspensión de los contratos de trabajo.

**2.- Art. 2.o) LRJS:***“Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan: ...* ***o)*** *En materia de prestaciones de Seguridad Social, incluidas la protección por desempleo y la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, así como sobre la imputación de responsabilidades a empresarios o terceros respecto de las prestaciones de Seguridad Social en los casos legalmente establecidos. También las cuestiones referidas a aquellas prestaciones de protección social que establezcan las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, dirigidas a garantizar recursos económicos suficientes para la cobertura de las necesidades básicas y a prevenir el riesgo de exclusión social de las personas beneficiarias. Igualmente, las cuestiones litigiosas relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, así como sobre el reconocimiento de la situación de dependencia y prestaciones económicas y servicios derivados de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, teniendo a todos los efectos de esta Ley la misma consideración que las relativas a las prestaciones y los beneficiarios de la Seguridad Social***”.**

El orden social conocerá de la impugnación de los actos administrativos en materia de reconocimiento de la situación de **dependencia** y de las relativas al derecho a las prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia, que pongan fin a la vía administrativa y hayan sido dictados a partir de la vigencia del RDL 6/2023 (DT 4ª.1) que se concreta a los tres meses de su publicación en el BOE (DF 9ª.1 RDL 6/2023), es decir el 20-03-2024.

La reforma constitucional del art. 49 CE (BOE 17-02-2024), contiene la exigencia de que “**1.***Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio*”.

**3.-** Respecto a las **prestaciones de protección social**: reflexión sobre la extensión competencial del orden social a todo tipo de prestaciones de asistencia y protección social públicas.

**4.-** La acertada no inclusión de la incompetencia del orden social respecto conocimiento de “*los actos administrativos dictados en las fases preparatorias, previas a la* **contratación de personal laboral** *para el ingreso por acceso libre*”.

**II.-DE LAS PARTES PROCESALES** (ARTS. 16 A 24 LRJS).

**A/** Dar entrada directa en el orden social al registro electrónico de apoderamientos apud acta, -- en concordancia con las “*Medidas de Eficiencia Digital y Procesal del Servicio Público de Justicia*” contenidas en los arts. 1 a 100 del RDL 6/2023, en especial con sus arts. 74 a 77, reguladores del ahora denominado “*Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales*” --, modificando **arts. 18.1 y 19.2 LRJS**.

**B/** Articular más detalladamente la intervención en la instancia de abogado/a, graduado/a social y procurador/a cuando lo pidan las partes:

**[1]** buscando fórmulas para interrelacionar las sucesivas peticiones de intervención de tales profesionales que con tal fin puedan efectuar la parte actora y/o, en su caso, la demandada,

**[2]** con la expresa obligación de indicar “*los datos de contacto del profesional*” designado para facilitar las ulteriores comunicaciones y

**[3]** con la advertencia de derechos a cargo del LAJ, en aras a lograr la igualdad procesal. Modificando el **art. 21.2 LRJS** que debe interrelacionarse con el nuevo **art. 81.5 LRJS**.

**III.- DE LA ACUMULACIÓN DE ACCIONES, PROCESOS Y RECURSOS (**ARTS. 25 A 41 LRJS).

**Finalidad**:

**a)Agilizar la resolución de procedimientos con idéntica causa, evitar duplicidades y pronunciamientos incompatibles o contradictorios**, incentivando al máximo la acumulación de acciones y procedimientos por iniciativa de las partes, sin perjuicio de que sea el propio órgano judicial quien lleve a cabo la acumulación, de oficio y en defecto de la voluntad de aquellas; y

**b)Regular los efectos de la acumulación de procesos acordada, la que únicamente podrá dejarse sin efecto respecto de alguno de ellos en supuestos muy específicos**, como cuando no se cumplan las prescripciones legales que rigen la acumulación, o cuando el órgano judicial, considere que la acumulación podría ocasionar **perjuicios desproporcionados** a la tutela judicial efectiva del resto de intervinientes.

Preceptos modificados:

**1.-Acumulación objetiva y subjetiva de acciones** (art. 25.3, 5 y 7 LRJS): impulsar acumulación obligatoria de acciones (“*misma o análoga decisión empresarial*”); identidad del título o causa de pedir; acumulación de oficio; desacumulación(“*cuando aprecie, de forma motivada, que la acumulación podría ocasionar perjuicios desproporcionados a la tutela judicial efectiva del resto de intervinientes*”); deber de información a efectos de acumulación: AT o EP y/o actos administrativos con pluralidad destinatarios (“*las partes deberán informar de esta circunstancia al juzgado o sección al que se hubiera repartido la primera demanda o recurso*...”).

**2.-Supuestos especiales de acumulación de acciones** (art. 26.1, 3 y 8 LRJS): supresión expresión “*entre sí*”; acumulación responsabilidad por daños; trabajo a distancia; flexibilización presupuestos para acumulación acción de despido con reclamación de cantidad(“*de las cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada adeudadas hasta esa fecha*”); el reiterativo art. 26.8: MSCT (“*siempre que deriven de los mismos hechos o de una misma decisión empresarial”)* y despidos objetivos(“*siempre que deriven de cartas de despido con idéntica causa*”).

**3.-Acumulación de procesos seguidos ante el mismo juzgado o tribunal** (art. 28.1 LRJS)(“*varias demandas contra un mismo demandado, aunque los actores sean distintos, y se ejercitasen en ellas acciones idénticas o susceptibles de haber sido acumuladas en una misma demanda*”): obligatoriedad y coordinación expresa con desacumulación.

**4.-Acumulación de procesos seguidos ante distintos juzgados** (art. 29 LRJS): obligatoriedad y coordinación “tácita” con desacumulación; deber de información de las partes (“*las partes deberán comunicar esta circunstancia ante el juzgado o tribunal que conociese de la demanda que hubiera tenido entrada antes en el Registro*”).

**5.-Disposiciones comunes** a la acumulación de acciones, de procesos y de recursos (art. 34 LRJS): obligatoriedad, medida cautelar(“*Planteada la acumulación, podrán suspenderse durante el tiempo imprescindible aquellas actuaciones cuya realización pudiera privar de efectividad a la decisión que, sobre la procedencia de la acumulación, pudiera dictarse*”) y desacumulación.

**6.-Interrelación** con las reglas de acumulación de recursos y de desacumulación (art. 234.1 LRJS): acumulación obligatoria y desacumulación.

**7.-Interrelación con el “recurso testigo” en casación unificadora** (art. 225 bis ex RDL 5/2023).

**IV.-DE LOS ACTOS PROCESALES** (arts. 42 a 62 LRJS).

Finalidad: se pretende regular:

**a)** la **forma de relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia**; en especial: **[1]** actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares (art. 56.5); y **[2]** dar entrada directa en el orden social a la realización de actos de comunicación de forma electrónica por parte de los/as LAJ (art. 62 LRJS);

**b)** el **lugar** de las comunicaciones (art. 55) y la indicación por las partes o por los interesados o por los profesionales designados del lugar donde deban efectuarse las comunicaciones a ellos dirigidas y su **obligación de actualización con la derivada carga en caso de incumplimiento** (art. 53.2 LRJS).

**c)** la **forma** y el **lugar** de presentación de escritos y documentos (art. 44 LRJS) y la **comunicación edictal** (art. 59) (eliminación de la utilización de los boletines oficiales para la comunicaciones edictales; así como la utilización en el proceso social del Registro Central de Rebeldes Civiles y del “*Tablón Edictal Judicial Único*”).

Reformas:

**1.- Forma y lugar de presentación de escritos y documentos** (art. 44 LRJS): elección por parte de los trabajadores; por sistemas telemáticos o electrónicos si los sujetos intervinientes están obligados a su empleo ex art. 135 LEC. – Supresión la regla clásica del orden social consistente en que “*1. Las partes habrán de presentar todos los escritos y documentos en los Registros de la oficina judicial adscrita a los Juzgados y Salas de lo Social*” (art. 44.1 LRJS).- No presentación de escritos en los Juzgados de Guardia (art. 135.5 LEC)

**2.-Indicación** por las partes o por los interesados o por los profesionales designados del **lugar donde deban efectuarse las comunicaciones a ellos dirigidas** (domicilio físico y/o dirección electrónica) y su obligación de actualización con la derivada carga procesal en caso de incumplimiento (art. 53.2 LRJS).

**3.-Lugar de las comunicaciones** (art. 55): **oficina judicial y/o domicilio señalado** y/o **envío y recepción por medios telemáticos o electrónicos ex art. 162 LEC**; la especialidad de los actos tendentes a la personación en juicio o la realización o intervención personal de las partes en **determinadas actuaciones** ex art. 155.2 LEC (remisión a su domicilio).STC 6/2009 y otras.

**4.**- **Actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares a personas obligadas o que hayan optado por relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia** (*art. 56.5*): remisión al art. 162 LEC; imposibilidad de obligar contractualmente al trabajador a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia.

**5.**- **La comunicación edictal** (*art. 59*) (“*De resultar infructuosas las averiguaciones efectuadas, el letrado o letrada de la Administración de Justicia podrá dirigirse al RCRC para comprobar si el demandado consta en dicho Registro y si los datos que en él aparecen son los mismos de que dispone. En tal caso el letrado o letrada de la Administración de Justicia dictará diligencia de ordenación acordando directamente la comunicación edictal del interesado*”): el Registro Central de Rebeldes Civiles (art. 157 LEC) y el Tablón Edictal Judicial Único (art. 54 RDL 6/2023).- Tutela judicial efectiva: el mero hecho de que apareciera inscrito en el RCRC posibilitaría entender que no se procediera automáticamente por el LAJ a practicar la comunicación edictal (“*podrá*”).

**6.-**Dar entrada directa en el orden social a la realización de **actos de comunicación de forma electrónica por parte de los/as LAJ** “*si fuera posible*” (art. 62 LRJS).

**7.-** La acertada **no regulación de forma de oralidad de las sentencias** (art. 50.1 LRJS) prevista en el PLMEP.

**V.-DE LA EVITACIÓN DEL PROCESO** (arts. 63 a 73 LRJS).

Finalidad:

**a) Ajustes** sobre las “**excepciones**” al requisito del intento de conciliación o, en su caso de mediación extrajudicial (art. 64.1 y 2.a).

**b)** Establecer que las partes que no comparezcan al obligatorio acto de conciliación o de mediación asistidos por Abogados o profesionales designados tienen la **obligación de suministrar sus propios datos de localización (especialmente telemáticos) para las ulteriores comunicaciones** (*art. 66.1*).

**c)** La interrelación con los posibles procedimientos de **mediación en el proceso de ejecución** (art. 244.2).

**d)** No se aborda el problema de la actual general **ineficacia** de los procedimientos extrajudiciales de evitación del proceso.

Reformas:

 **1.-Excepciones a la conciliación o mediación previas** (*art. 64.1 y 2.a LRJS*): **[1] proceso monitorio**, **[2]** determinados procesos sobre **trabajo a distancia** (“*los de reclamación sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia a los que se refiere el artículo 138 bis*”)y **[3] procesos en que la representación corresponda a Abogados del Estado o de otras Administraciones públicas**.- **Crítica**: no se contempla la coordinación del art. 64 con el art. 156.1 LRJS que literalmente sigue exigiendo el intento de conciliación o de mediación en todo tipo de conflictos colectivos (interpretación corregida jurisprudencialmente, entre otras, por STS/IV Pleno 03-12-2019 -rco 141/2018).

**2.-No asistencia con profesionales designados al acto de conciliación o de mediación** (*art. 66.1*): obligación de **suministrar sus propios datos** por las partes que hayan comparecido **sin tales profesionales.**

**3.-**Interrelación con la suspensión de la **ejecución** (o incidentes ejecutivos concretos) para derivación a los procedimientos de **mediación** que pudieran estar constituidos, con la previsión de la ulterior **homologación judicial** del acuerdo alcanzado (art. 244.2 LRJS).

**VI.**- **DE LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO Y DE LOS DEBERES PROCESALES** (arts. 74 y 75 LRJS).

Sin modificación alguna por el RDL 6/2023.

**VII.-DEL PROCESO ORDINARIO** (arts. 76 a 101 LRJS).

Finalidades **:**

**a) Dotar de mayor protagonismo al LAJ** en el ámbito de admisión de demanda y diligencias necesarias para la preparación de prueba **(art. 81).**

**b)** El ALMEP articulaba, como uno de sus principios más trascedentes, el **separar el acto de conciliación del acto de juicio**, señalándolos en días separados; **definitivamente se ha desechado tal posibilidad** por el RDL 6/2023 que no efectúa modificación alguna en este sentido de los *art. 82 y 84.1 y 3.II LRJS*.

**c)** Regular el **nuevo** “**PROCEDIMIENTO TESTIGO** (uno o varios procedimientos judiciales iniciados quedan suspendidos hasta la firmeza de la sentencia dictada en el procedimiento preferente y una vez firme ésta, se concede a las partes la posibilidad de reanudar el pleito, de desistir del mismo o de acudir a una vía rápida de extensión de efectos) (*art. 86 bis*).

**d)** Establecer reglas sobre la documentación mediante **grabación de las actuaciones orales**, el uso de la **firma electrónica** u otro sistema de seguridad y el **expediente judicial electrónico** (*art. 89.1 y 2*); y

**e) Reformar el procedimiento monitorio** para permitir que un mayor número de asuntos se tramiten por esta vía (*art. 101*).

 Reformas:

**1.-** La **admisión de la demanda** (**art. 81** LRJS): supuestos de falta de jurisdicción o competencia; defectos u omisiones en que se haya incurrido al redactar la demanda; documentos de preceptiva aportación; diligencias de preparación de la prueba a practicar en juicio; diligencias de anticipación o aseguramiento de la prueba; requerimiento a la parte demandada para la designación de profesionales intervinientes.

**2.-** El nuevo e importante “**procedimiento testigo**” (**art. 86 bis** en relación con el art. 247 ter): también previsto especialmente en el arts. 438 bis LEC ex RDL6/2023 y 37 LRJCA; relacionable con la nueva figura de “extensión de efectos” ex art. 247 bis LRJSy con el acceso a **suplicación** (art. 191.3.b LRJS).

**3.-** Reglas sobre sobre la documentación mediante grabación de las actuaciones orales, el uso de la firma electrónica u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantías y el expediente judicial electrónico (**art. 89.1 y 2**): remisión a arts. 146 y 147 LEC.

**4.-** Forma de la sentencia: sanciones pecuniarias y condena a abono de honorarios (**art. 97.3 LRJS**): interrelación con el art. 66.3 LRJS que únicamente se refiere a las costas.

**5.-** El proceso monitorio (**art. 101 LRJS**): exceptuado del requisito del intento de conciliación o mediación; incremento de cuantía (de 6.000 a 15.000 €); simplificación en caso de oposición; mantenimiento de que el requerimiento al demandado deba efectuarse necesariamente de forma personal.

**VIII.**- **DE LAS MODALIDADES PROCESALES** (arts. 102 a 185 LRJS).

Finalidad y reformas:

**a)** En la modalidad procesal de **despido** se adicionan dos supuestos de “*urgencia*” y de “**tramitación preferente**”, en los que el acto de la vista habrá de señalarse dentro de los 5 días siguientes al de la admisión de la demanda y la sentencia se dictará en el plazo de 5 días:

**[1]** Cuando el trabajador manifieste que la empresa no ha tramitado su **baja por despido en la TGSS** (**art. 103.4** LRJS);

**[2]** Demandas en las que se solicite la **extinción de la relación laboral invocando la causa prevista en art. 50.1.b) ET** (**art. 103.5** LRJS)..

**b)** En la modalidad procesal de **seguridad social**, se contempla que por la Entidad gestora o por el organismo gestor o colaborador pueda efectuarse la remisión del expediente en forma electrónica (**art. 143.1**): la remisión, a través de un *nodo de interoperabilidad*, de la dirección electrónica o localizador que dé acceso al expediente electrónico puesto a disposición equivaldrá a la remisión del mismo.

**IX.-DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN** (arts. 186 a 236 LRJS).

Finalidades y reformas**:**

**a)** Exigencia de intervención judicial en la **revisión de resoluciones de los LAJ**, dado que el **art. 188.1.I LRJS** fue declarado inconstitucional y nulo por STC 72/2018, de 21 de junio en cuanto impedía la interposición de recurso de revisión contra el decreto resolutivo de la reposición.

**b)** El **procedimiento testigo**y el acceso al recurso de suplicación (art. 191.3.b/: “*Procederá en todo caso la suplicación... cuando la sentencia de instancia fuera susceptible de extensión de efectos*”);

**c)** La **acumulación** de **recursos** (obligatoria y desacumulación)(*art. 234.1*) e interrelación con el nuevo “recurso testigo” en el ámbito de la casación unificadora introducido por el art. 225 bis LRJS ex RDL 5/2023 de 28 de junio; y

**d)** El **nuevo motivo de revisión** introducido en el art. 510.2 LEC por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio en relación con las resoluciones firmes estimatorias dictadas por el TEDH.- Se limita a facilitar la intervención de la Abogacía General del Estado imponiendo a los/as LAJ obligaciones de traslado, de información y de notificación (art. 236.1.IV LRJS).

**X.-DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS** (arts. 237 a 305 LRJS).

Finalidades y reformas:

**1º)** la posibilidad de **suspensión de la ejecución** por mutuo acuerdo de las partes para derivación de la ejecución (o alguna de sus incidencias) a los procedimientos de **mediación** que pudieran estar constituidos (art. 244). La suspensión debe solicitarse por las partes de mutuo acuerdo y la regulación prevista es la adecuada, al mantener íntegramente las garantías de la transacción en la ejecución ex art. 246 LRJS siendo el juez o tribunal el que homologa el acuerdo alcanzado.

**2º)** La introducción de **dos trámites procesales diferentes** para luchar contra la llamada "*litigiosidad en masa*“ (aplicables también a los procedimientos seguidos contra Administraciones públicas) y en concordancia a lo dispuesto para otras jurisdicciones en los *arts. 37, 86.1, 110 y 111 LRJCA y 438 bis y 519 LEC*:

**[1]** uno, el de la **EXTENSIÓN DE EFECTOS** en el caso de un procedimiento testigo (*art. 247 ter*) y,

**[2]** otro, la **EXTENSIÓN DE EFECTOS DE UNA SENTENCIA JUDICIAL FIRME “***que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas”* **a otras personas que no han iniciado un procedimiento judicial y** “*se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo*”(*art. 247 bis*).

**3º)** Para que los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas pueda **extenderse a otras** directamente en ejecución de la sentencia firme, se contemplan, con detalle, los siguientes extremos:

**a) Circunstancias precisas para la extensión de efectos** en ejecución de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas.- Cuestiones: **[1]** materias: cualesquiera (a diferencia art. 110.1 LRJCA); **[2]** tipo de sentencia: firme, ¿declarativa?, ¿recaída en proceso de conflicto colectivo?, ¿restantes títulos ejecutivos judiciales o extrajudiciales –arg. ex art. 247.2 LRJS?; **[3]** delimitación de la “*idéntica situación jurídica*”; **[4]** competencia territorial para conocer de pretensiones de reconocimiento; **[5]** plazo de 1 año para solicitarla: cómputo desde última notificación, ¿prescripción e interrupción –relación con art. 160.6 LRJS sobre conflicto colectivo?.

**b) Solicitud de parte interesada ante el órgano competente y documentación acreditativa**.- Cuestiones: **[1]** ¿órgano competente para la ejecución de la sentencia cuyos efectos se pretenden extender?, ¿órgano que hubiere dictado la resolución a extender?; **[2]** solicitud más documentos acreditativos de identidad de situaciones y la no concurrencia de circunstancias impeditivas y, en su caso, es “*la Administración la que en el informe detallado sobre la extensión solicitada debe acreditar la existencia de circunstancias que rompan la identidad alegada*” (STS/III 24-02-2016 –rec 19/2015); **[3]** innecesariedad de agotar la vía administrativa de pretenderse la extensión de efectos frente a la Administración pública (STS/III 18-06-2020 –rec 7369/2018 –Maurandi);

**c) Tramitación incidental.-** Cuestiones: **[1]** traslado a posibles responsables (alegaciones y aportación antecedentes) y, en su caso, informe detallado de la entidad del sector público sobre viabilidad de la extensión; **[2]** aceptación o no aceptación por los responsables; **[3]** de no aceptarse, posible trámite incidental ex art. 238 LRJS; **[4]** auto resolutorio; **[5]** el testimonio del auto estimatorio como título para instar la ejecución.

**d)** Circunstancias que obligan a **desestimar** el incidente de extensión de efectos: **[1]** existencia de cosa juzgada (¿y de litispendencia?); **[2]** doctrina del fallo a extender contraria a la jurisprudencia del TS o reiterada del TSJ territorialmente competente (cabe extender su previsión a la doctrina que proceda del TJUE o del TC si es que la extensión de efectos interesada infringe su interpretación del Derecho de la Unión Europea o la Constitución -STS/III 15-11-2023 –rec 3277/2020) y la carga de demostrar dicha contradicción incumbe a quien se opone a la misma, de forma que el interesado en la extensión de efectos no está obligado a demostrar que no existe jurisprudencia contradictoria); **[3]** el interesado tuviera resolución hubiera causado estado en vía administrativa por no impugnada (crítica doctrinal: absurdo de conceder un trato privilegiado al que se muestra pasivo frente al que reclama ante la Administración aunque posteriormente no agote la vía administrativa o jurisdiccional).

**e)** Circunstancias que obligan a **suspender** la decisión del incidente de extensión de efectos: **[1]** pendencia de demanda de revisión o de incidente de nulidad contra la sentencia; **[2]** pendiente asunto idéntico en casación unificadora; y

**f)** El régimen de **recurso** del auto dictado: reglas sobre autos dictados en ejecución.

**4.-** La nueva **extensión de efectos en caso de procedimiento testigo**, regulándose en el nuevo **art. 247 ter** la ejecución, de optarse por ella, en lo relativo al pleito testigo, con la peculiaridad de que “*Si se solicitase la extensión de efectos de aquella sentencia, el juez, la jueza o el tribunal la acordará, salvo que concurran las circunstancias previstas en el artículo 247 bis 5, o alguna causa de inadmisibilidad propia del proceso suspendido que impida el reconocimiento de la situación jurídica individualizada*” (art. 247 ter II LRJS); la que podría integrarse con el nuevo **art. 86 bis** (precepto al que nos remitimos).